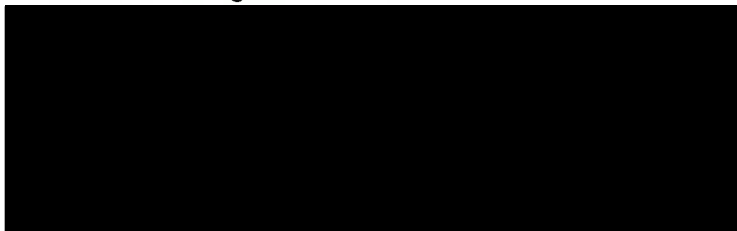




Nº EXPEDIENTE: 001-002808

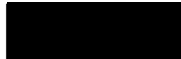
FECHA: 12 de agosto de 2015



Madrid, 17 de agosto de 2015.

1º. Con fecha 13 de agosto de 2015 tuvo entrada en este Ministerio una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número de expediente 001-002808:

*La Ley 19/2013 de transparencia otorga a los ciudadanos a conocer íntegramente la documentación pública (definida como aquella generada por la administración en ejercicio de sus funciones). En este sentido, a principios de año solicité la Acreditación en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en la ANECA. Hoy mismo he recibido la notificación de la propuesta de resolución desfavorable. De acuerdo con la Ley 19/2013 de transparencia solicito sea informado de quienes han sido los dos expertos que han elaborado los correspondientes Informes de Expertos en el proceso de Acreditación de Profesores Titulares de Universidad acaecido en julio pasado en la ANECA al amparo de los artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992, y de los art. 2,12,13 de la 19/2013. Datos: REF: 2015-002746 Solicitante*



2º. Con fecha 14 de agosto de 2015 dicha solicitud se recibió en esta Secretaría de Estado, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre para su resolución.

3º. Una vez analizada la solicitud, esta Secretaría de Estado considera que el acceso a la información solicitada supondría un perjuicio para la garantía de la confidencialidad requerida en este tipo de procedimientos, toda vez que la información que se solicita supone uno de los pilares en los que se asienta el procedimiento de acreditación, lo que llevaría a concluir que la concesión del acceso tendría incidencia en los procedimientos que se sustanciaran a partir de este momento.

4º La resolución de la Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, recaída en el expediente R/0035/2015, similar al que nos ocupa, señalaba que "la identidad de los expertos que participan en un concreto procedimiento de acreditación permanece desconocida con vistas a garantizar la adecuada independencia y libertad con la que deben de pronunciarse en su informe. De esta manera, se entiende, podrán desempeñar su función con las debidas garantías de imparcialidad, evitando posibles presiones. En este caso, si bien



se trataría del acceso a la identidad de los expertos a *posteriori*, es decir, una vez que el procedimiento de acreditación ya ha finalizado, no es menos claro que, como ya se ha expuesto anteriormente, que la denegación o no de la información vincularía a futuros procedimientos, ya que cambiaría el marco conforme al cual se elaboran los informes de expertos. Además, si bien el acceso a la información en este caso tendría un impacto más moderado toda vez que el procedimiento ya ha concluido y que los datos personales forman parte de un listado que ha sido publicado en la página web de ANECA, una cesión de esta información personal, vinculando al titular de los datos con su participación en un concreto procedimiento de evaluación, no sería conforme con la normativa en materia de protección de datos de carácter personal”.

En el expediente R/0035/2015, la incidencia limitada del informe en el proceso de acreditación, debido a que la decisión recae en la Comisión de acreditación; el hecho de que dicho informe, elaborado en el anonimato, pueda ser emitido con mayor libertad; y que la identidad de los expertos, agrupadas por áreas de conocimiento, ya sea pública y, derivado de ello, que pueda iniciarse un proceso de recusación con carácter previo a la eventual participación en una concreta solicitud de acreditación, permitieron concluir que en este supuesto prevalecía la protección del secreto requerido en los procesos de toma de decisión en los términos previsto en el artículo 14.1 k) de la LTAIBG .

5º. De acuerdo con el artículo 14.1.k) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14.1.k) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, esta Secretaría de Estado resuelve denegar el acceso a la información pública a la que se refiere la petición.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse previa y potestativamente reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses; en ambos casos el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente resolución.

EL SECRETARIO DE ESTADO

Fdo: Marcial Marín Hellín.

